

CRISIS Y PERIFERIA

David Ibarra
25 de junio de 2009
El Universal

En mi artículo anterior (13 de junio), señalé que la crisis financiera global ha puesto en tela de juicio las reglas del consenso del neoliberalismo sobre el orden económico internacional y alterado las políticas económicas de los países líderes en el mundo.

Se abandona el criterio anterior de cancelar el intervencionismo estatal para dejar la economía en manos del mercado. El dogma de las capacidades autocorrectoras de los propios mercados ha caído en descrédito al volverse indispensable la acción de los estados en la solución de la crisis. Asimismo, han debido rebasarse los mitos del equilibrio presupuestal y de la suficiencia de los bancos centrales para modular sin oscilaciones críticas el ciclo económico.

En los hechos, los gobiernos del Primer Mundo implantan medidas monetarias heterodoxas e instrumentos keynesianos que hasta hace poco tiempo habrían sido repudiadas por la mayoría de los gobiernos de Occidente. Como corolario, se han alterado o seguirán alterándose las premisas básicas de los modelos dominantes de la política económica universal.

Tardíamente la crisis financiera, lleva a reconocer el imperativo de corregir los desequilibrios y las oleadas especulativas, creadas por la libertad extrema de los mercados en un contexto de rápida globalización y de controles estatales en retirada. Las consecuencias están a la vista: ruptura repetida y agravada de burbujas especulativas (bienes inmobiliarios, acciones, *commodities*) que colocan en situación de indefensión a muchos grupos o instituciones; desajustes comerciales y financieros insostenibles entre los principales países; reconfiguración de los centros del poder económico del mundo; recrudecimiento de los problemas sociales, como lo atestigua la aguda concentración de ingresos y riqueza dentro y entre naciones; atención insuficiente a los problemas asociados al deterioro ecológico y al abasto de energéticos limpios, a la proliferación de armas nucleares.

En el caso de varios países latinoamericanos, la enseñanza principal del desbarajuste económico universal debiera conducir a usar deliberadamente los márgenes de autonomía nacional, aún pasando por alto muchos de los dictados del canon neoliberal. Es difícil esperar ayuda externa suficiente para paliar la crisis en ausencia de acuerdos internacionales o de una suerte de gobierno mundial, ambos todavía lejos de concretarse. Estamos a la cola de la recuperación mundial, librados a nuestras propias fuerzas ante la caída de la demanda externa, del financiamiento internacional y del empleo interno. Ya los pronósticos habitualmente optimistas de la OCDE anticipan una caída del 8% del producto mexicano.

Con todo, la hondura de la crisis económica y la flexibilización de las restricciones del orden internacional con la adopción de medidas heterodoxas en el Primer Mundo, facilitan la revisión crítica de las ideologías neoliberales. Y, sobre todo, permitirán abordar con mayor autonomía acciones contracíclicas, así como objetivos de mayor envergadura -políticas industriales, fiscales, de control financiero, de empleo y de integración social-, cuya ausencia influyó decisivamente en el rezago del desarrollo latinoamericano. Ya las tensiones sociales favorecen a los gobiernos de inclinaciones progresistas en la región y el desapego crítico al Consenso de Washington. En consecuencia, el modelo de crecimiento de la región, debiera revisarse al menos para conciliar los mejores atributos de Estado y de los mercados o para aliviar la subordinación de las políticas sociales a las económicas.

Para los países en desarrollo los acontecimientos reseñados anuncian el inicio de otro costoso proceso adaptativo al orden internacional en formación. En consecuencia, importa reestructurar bien y de prisa, las políticas nacionales, so pena de repetir los costosos retrasos experimentados por América Latina en el pasado reciente. En efecto, la crisis tiene numerosas aristas y afecta a múltiples dimensiones de la vida social sobre todo en países cuya recuperación habrá de seguir con rezago a la del Primer Mundo. La dimensión económica exigiría desde

la revisión de los paradigmas y modelos que alimentan a las políticas públicas, desde el diseño de políticas industriales, hasta la instrumentación de acciones contracíclicas, reductoras de los efectos nocivos de la depresión. Ya no cabe la misma división neoliberal de las funciones entre el Estado y el mercado. El intervencionismo gubernamental, por ineludible necesidad, pasará a ser característica más o menos permanente de nuestros países.

Las políticas sociales enfrentadas al deterioro de la protección ciudadana y al impacto brutal de la crisis, también necesitan ser liberadas del juego economicista que obstruyó el empleo y la universalización de los accesos a servicios públicos esenciales. Las políticas sociales del futuro no podrán limitarse a paliar -que no resolver- los efectos de la pobreza y exclusión, producidos por los modelos económicos en boga. Las metas de protección ciudadana, habrían de equipararse en jerarquía, sin subordinación, a las del orden mercantil hasta lograr equilibrios razonables, sancionados democráticamente por las poblaciones.

De la misma manera, convendría aflojar los cerrojos economicistas al juego político de partidos y legislaturas. El propósito sería el de impulsar el tránsito de la democracia formal a una democracia sustantiva que abriese a la participación ciudadana las decisiones fundamentales sobre el bienestar social y los derechos humanos. En tal contexto, los intereses de las elites económicas, tendrían relevancia análoga a los otros grupos hasta ahora excluidos del poder político decisorio.

Junto a la obsesión neoliberal por abatir la inflación -aun a costa del crecimiento-, surge en algunos países otra tarea igualmente absorbente de las energías gubernamentales. Se trata de combatir, incluso *manu militari*, la corrupción o la violación de las leyes, ostensible en el tráfico de drogas o el llamado crimen organizado. Sin duda, son objetivos válidos en sí mismos, aunque casi imposibles de alcanzar mientras se dejen de lado otros fenómenos que los alimentan y con los cuales están inextricablemente relacionados. La

descomposición social en sus manifestaciones más oscuras, no es sólo resultado de valores culturales distorsionados, sino del clima de anomia causado por la desatención a demandas ciudadanas legítimas, asociadas a la insuficiencia de crecimiento, la pobreza, la impunidad, la falta de representatividad de los partidos políticos y las limitaciones de la democracia electoral. Quiérase o no, el problema de la violación cotidiana del Estado de derecho es más compleja de lo que podría alcanzarse simplemente con mayores dosis de presión autoritaria. El camino de restablecer el orden elitista a cualquier costo, ha sido recorrido por América Latina en múltiples ocasiones con resultados generalmente desafortunados, aunque en apariencia fortalecieran al Estado. Recuérdense las experiencias no tan lejanas de Chile, Argentina, Colombia, Nicaragua, El Salvador, así como el uso político-electoral o el de dominación internacional que se dio a las campañas anti-terrorismo o anti-crímenes, donde el combate a delitos privados acabó entremezclándose con crímenes de Estado.